



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010044805 DEL 03/04/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.”*

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de CAPITANEJO - SANTANDER, es de categoría 6 y según lo manifestado en la Resolución No. SSPD 20164010053275 del 30 de septiembre de 2016, fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015.

Que para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB en la vigencia 2015, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010053275 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia Delegada resolvió DESCERTIFICAR al Municipio de CAPITANEJO - SANTANDER, por no haber cumplido el siguiente requisito establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015, que corresponde al aspecto *“Implementación y aplicación de las metodología tarifarias establecidas por la CRA”*.

- *“Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias vigentes para cada uno de los servicios públicos prestados”*.



Que dicha resolución fue notificada por aviso el día 20 de febrero de 2017 y que el municipio interpuso recurso de reposición radicado SSPD 20175290128082 de 2 de marzo de 2017, contra dicho acto administrativo.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y DOCUMENTOS APORTADOS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1 De los argumentos del recurrente

2.1.1 Adujo el recurrente que el día 15 de abril del año 2016 recibió la respectiva certificación del reporte del *"Estudio de Costos y Gastos de Tarifa"* para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y que desde el año 2010 y hasta la fecha lo ha reportado de manera oportuna y diligente ante el SUI, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

2.1.2 Expuso que si en el marco de las comunicaciones de esta Superintendencia con el municipio, en relación con el proceso de certificación que adelantaba el ente territorial, la entidad le hubiera requerido al municipio previamente, se hubiera constatado que al momento de reportar al SUI se presentó una inconsistencia en el cargue del archivo de Costos y Tarifas para la vigencia fiscal 2015, consistente en que no se recepcionó de manera completa la información, por lo que solicitó le fuera tenido en cuenta el principio de buena fe en sus actuaciones.

2.1.3 Indicó que conforme a la potestad sancionatoria el estado debe agotar los mecanismos que le permitan inferir que la sanción es la consecuencia del agotamiento del debido proceso en el cual se le indicara que se cargó de manera incompleta el archivo a pesar de los controles previos que hizo la Superintendencia.

2.2 De los documentos aportados por el recurrente

Aportó el ente territorial copia de los siguientes documentos:

- 2.2.1 Diagnóstico proceso de certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2015.
- 2.2.2 Impresión del pantallazo de la página del SUI donde se acredita el cargue del archivo de fecha 18 de abril de 2016.
- 2.2.3 Comunicado emanado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- 2.2.4 Copia del Estudio tarifario de acueducto, alcantarillado y aseo, aplicable desde el año 2010.

Los anteriores documentos, con su valor legal se incorporan al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Superintendencia Delegada procederá a analizar el único argumento expuesto, de la siguiente manera:

- Del argumento relacionado con haber reportado un estudio de costos incompleto y de la falta de requerimiento de tal circunstancia por parte de la Superintendencia

Adujo el recurrente que el día 15 de abril del año 2016 recibió la respectiva certificación del reporte del *"Estudio de Costos y Gastos de Tarifa"* para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y que desde el año 2010 y hasta la fecha lo ha reportado de manera oportuna y diligente ante el SUI, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

Expuso que si en el marco de las comunicaciones de esta Superintendencia con el municipio, en relación con el proceso de certificación que adelantaba el ente territorial, la entidad le hubiera requerido al municipio previamente, se hubiera constatado que al momento de reportar al SUI se presentó una inconsistencia en el cargue del archivo de Costos y Tarifas para la

vigencia fiscal 2015, consistente en que no se recepcionó de manera completa la información, por lo que solicitó le fuera tenido en cuenta el principio de buena fe en sus actuaciones.

Indicó que conforme a la potestad sancionatoria el estado debe agotar los mecanismos que le permitan inferir que la sanción es la consecuencia del agotamiento del debido proceso en el cual se le indicara que se cargó de manera incompleta el archivo a pesar de los controles previos que hizo la Superintendencia.

Con relación al argumento en estudio, este Despacho se permite señalar lo siguiente:

La norma objeto de estudio es precisa en regular las vigencias, los requisitos de certificación y los plazos para proceder acreditar los mismos. En efecto, el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015 establece, con relación al requisito que nos ocupa, lo siguiente:

<i>"Implementación y aplicación de las metodologías tarifarias establecidas por la CRA".</i>	<i>"Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias vigentes para cada uno de los servicios públicos prestados". (...)</i>
--	--

En este orden de ideas, se tiene que la norma expresamente indica la información que debe contener el documento a reportar por el ente territorial, a saber, que el estudio de costos y tarifas sea elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias vigentes, para cada uno de los servicios públicos prestados.

Ahora bien, contrario a lo manifestado por el ente territorial quien manifiesta haber reportado continuamente el estudio de costos y tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo desde el año 2010, se advierte que para el proceso de certificación que nos ocupa, el requisito atinente a reportar dicho documento se estableció a partir de la vigencia 2014, con el Decreto 1484 de 2014 y en dicha vigencia el MUNICIPIO DE CAPITANEJO fue descertificado mediante Resolución No. 20154010040445 del 29 de septiembre de 2015, toda vez que no cumplió entre otras con dicho requisito, veamos:

(...)



GD-F-008 V.9

Página 1 de 3

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20154010040445 DEL 29/09/2015

"Por la cual se decide sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico SGP-APSB, correspondiente a la vigencia 2014"

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

(...)

Que, al ostentar la calidad de prestador directo al 31 de diciembre de 2014, se procedió a revisar los requisitos establecidos en el artículo 2.3.5.1.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015, encontrando que:

1. En cuanto a la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, se verificó que el municipio cumplió con el reporte realizado en el SUJ, el 15 de marzo de 2011, del estudio de costos y tarifas del servicio de aseo, así mismo se verificó que no se realizó el cargue del estudio de costos y tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.

(...)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESCERTIFICAR al municipio de CAPITANEJO, del departamento de SANTANDER, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde de municipio de CAPITANEJO, del departamento de SANTANDER, en su calidad de representante legal del municipio, o a quien haga sus veces, quien será citado en la Carrera 18 No. 84 - 35 en Bogotá, haciéndole entrega de una copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta decisión procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

(...)"

En este orden de ideas, es claro que el municipio tenía conocimiento que debía reportar para la siguiente vigencia (2015) el estudio de costos para los tres (3) servicios prestados, no obstante, no se allanó a dichos efectos.

Ahora bien, en el presente caso, no se trata de un reporte incompleto de información hecho por el municipio, sino de una omisión tal en reportar el estudio de costos de servicio de acueducto, situación que no ha sido desvirtuada por el recurrente y que una vez verificada en el Sistema Único de Información, se verifica nuevamente en esta instancia.

En este orden de ideas, como bien lo reconoce el ente territorial, erró en el cargue de la respectiva información por lo que su reporte se encontró inconcluso e insuficiente para que esta Superintendencia lo certificara. No obstante, debe indicársele al peticionante, que equivocadamente manifiesta que si esta entidad le hubiera requerido previamente, se hubiese constatado que su documentación estaba incompleta. Lo anterior, debido a que está en el resorte del municipio cumplir con las normas que le atañen en cada uno de los procesos y asumir las consecuencias establecidas en las normas en caso de incumplimiento, sin perjuicio

de lo cual es claro que en dicho caso sea el Departamento quien deba administrar los recursos del SGP-APSB.

Ahora, con relación a los diagnósticos que publicó la Superintendencia, es de señalar que solo corresponden a un estado de información reportada y no a la calidad de la misma, esto se puso de presente a los municipios en dichos diagnósticos, en los siguientes términos:

"Este documento corresponde a un estado de reporte de los formatos y formularios dispuestos en el SUI para acreditar el cumplimiento de la información señalada en el Decreto 1077 de 2015, con corte al 02 de mayo de 2016 y no contiene el análisis de la información cargada."

En este orden de ideas, tampoco era deber del Despacho informar al ente territorial su incumplimiento a un requisito con anterioridad a la expedición de la resolución que decidió el proceso de certificación para la vigencia 2015 toda vez que los resultados del proceso de certificación que corresponde a la evaluación de los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, se ponen en conocimiento por medio de una resolución a más tardar el 30 de septiembre de la respectiva anualidad.

Por otra parte, con relación al principio de buena fe, se evidencia que el municipio hace referencia a dicho principio y al desarrollo jurisprudencial que al respecto ha desarrollado la Corte Constitucional, es de señalar que el artículo 83 de la Constitución Política consagra que la buena fe debe presumirse en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas lo que ha hecho este Despacho particularmente en lo que respecta a la presente actuación administrativa, no obstante, ello no implica que el simple actuar de buena fe que se presume en el ente territorial sea suficiente para exonerarla del cumplimiento de sus deberes legales dentro de los términos estipulados en las normas pertinentes y mucho menos para desvirtuar el incumplimiento en cuestión, el cual se encuentra debidamente demostrado tal y como ha sido ampliamente expuesto.

Ahora bien, debe recordar que el proceso de certificación no corresponde a un proceso sancionatorio, en el que se formulan cargos que deben ser sujeto de contestación y demás etapas que caracterizan a este tipo de procesos.

Por el contrario, conforme al artículo 10 del Decreto 1484 de 2014 compilado por el artículo 2.3.5.1.2.1.10 del Decreto 1077 de 2015, el proceso de certificación corresponde a una **actuación administrativa** atinente a la verificación que debe hacer la Superintendencia de Servicios Públicos del cumplimiento por parte de los municipios a los requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 (municipio no prestador directo) y 2.3.5.1.2.1.7 (municipio prestador directo) del Decreto 1077 de 2015, según lo dispone el artículo 2.3.5.1.2.1.5 *ibidem*, con el fin de establecer si dichos ente territoriales administrarán o no los recursos del SGP – APSB para cada vigencia.

En este orden de ideas, es claro que el ente territorial tiene la obligación de cumplir unos requisitos taxativamente establecidos en las normas señaladas dentro de un término establecido. Para el caso concreto, vigencia 2015, el MUNICIPIO DE CAPITANEJO - SANTANDER debió acreditar, por expreso mandato normativo, los requisitos señalados en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015, a más tardar el 20 de mayo de 2016 y al no haber procedido con el cabal cumplimiento de lo requerido por la norma, el ente territorial fue descertificado.

Por consiguiente, no es con ocasión al recurso de reposición, que el municipio debe pretender subsanar su incumplimiento, que tal y como se señaló no corresponde a un reporte incompleto de información, sino a una omisión en reportar el estudio de costos y tarifas para el servicio de acueducto.

Queda demostrado entonces, el incumplimiento para la vigencia 2015 del requisito sujeto a controversia, sin que el ente territorial haya podido desvirtuarlo.

Así las cosas, se evidencia que el ente territorial, incumplió con el requisito de "*Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias vigentes para cada uno de los servicios públicos prestados*", establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.7, del Decreto 1077 de 2015, norma que

sustentó la decisión de descertificación, en consideración a lo cual el recurso formulado por el recurrente no prospera y corolario de lo anterior la resolución recurrida se confirma.

En mérito de lo expuesto, esta Coordinación del Grupo de Certificaciones e Información,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010053275 del 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al Alcalde del Municipio de CAPITANEJO del Departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Diana Marcela Romero Rojas– Abogada DAAA

Revisó: Katherine Arenas - Abogada contratista -Grupo de Certificaciones e Información

Expediente: 2016401351600204E